



Editorial

Un país armado

EL Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y Small Arms Survey (SAS) de la Universidad de Ginebra (Suiza) acaban de presentar un informe -publicado ayer por este diario- sobre los niveles de violencia armada cuyos resultados son, por desgracia, muy desfavorables para el país, como lo indica el hecho de que entre 1979 y 2005 murieron 475.000 civiles y combatientes por armas de fuego, ya sea como consecuencia del conflicto armado o por efectos de la criminalidad. Tan alarmante como la cifra es el hecho de que la mayoría de las víctimas son jóvenes entre 20 y 29 años de edad, justo en momentos en que se disponían a conformar una nueva familia o iniciaban su vida laboral.

La investigación no sólo se ocupa en el impacto del uso de las armas de fuego sobre la seguridad de las personas, sino que también analiza su producción y comercio en todo el país, tanto aquellas que son legales como las ilegales, utilizadas por las organizaciones irregulares, y que son adquiridas en el mercado negro internacional.

Una de las revelaciones del estudio tiene que ver con el hecho de que mientras en el mundo las enfermedades del corazón son consideradas la principal causa de muerte, en Colombia lo es el uso de las armas de fuego, que pasó de un 3 por ciento en 1979 a un 15 por ciento en 2002, cuando alcanzó el mayor porcentaje de los últimos años. El conflicto armado ha producido en el país cerca de 40.000 muertes por armas de fuego desde 1988, según el estudio del Cerac.

En la investigación una vez más quedó confirmada la tesis según la cual el negocio de las drogas ilegales está estrechamente relacionado con el tráfico ilegal de armas. Mientras que las primeras salen del país, las segundas ingresan de forma ilegal, tanto para organizaciones subversivas, como paramilitares y para diferentes grupos de delincuentes organizados. Se trata de un lucrativo negocio ilegal de doble vía que pese a las acciones de las autoridades sigue movimiento miles de millones de pesos y produciendo miles de muertos en el país.

En lo que tiene que ver con las armas en manos de los grupos paramilitares que se han desmovilizado, aún se mantiene la incertidumbre no sólo sobre la calidad de las mismas sino sobre la verdadera cifra entregada al gobierno e inclusive sobre su destinación final, como lo denunció un informe reciente de la Organización de Estados Americanos (OEA) según el cual en algunas regiones del país se ha venido presentando una nueva “reparamilitarización”; es decir, un reagrupamiento armado de esas organizaciones.

En Colombia, sostiene el informe, existen cerca de 4 millones de armas y de éstas alrededor de 2.4 millones son ilegales; es decir, es mayor la proporción de armas que se encuentran por fuera del control del Estado que aquellas que son reguladas y controladas por las autoridades. Ahí radica, sin duda alguna, una buena explicación para el alarmante número de víctimas de armas de fuego en el país.

A ello se suma el creciente “armamentismo legal” que se ha venido presentando en los últimos años y que encuentra su justificación en expresiones como aquella de que “tengo que estar armado para defenderme de los atracadores o los secuestradores”, pero que en realidad se traduce en una muerte violenta por cuenta de una riña callejera o por el arreglo a bala de una discusión entre un grupo de amigos.

Estos hechos demuestran no sólo que el monopolio de las armas no radica en el Estado, como lo establece la Constitución Política, sino que las autoridades han perdido el control sobre las mismas. En ese sentido son alarmantes otros informes oficiales que muestran el incremento del número de armas de fuego en manos de menores de edad, quienes acceden a ellas por permisos o descuidos de sus padres.

Es por todas estas razones que se hacen cada día más urgente los controles que deben existir por parte de las autoridades no sólo para el tráfico ilegal de armas, sino para el porte de las mismas, sobre todo en las principales ciudades del país. Cuando dichos controles se han extremado, o se han llevado a cabo efectivas campañas de desarme, los indicadores de muertes violentas por el uso de armas de fuego se han reducido de forma considerable, pues está demostrado que a mayor control hay menos muertes violentas por armas de fuego.